



**JUZGADO DÉCIMO (10°) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020220012200
Clase Proceso	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	BLANCA MARLENE VARGAS VASQUEZ
Demandado	NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL– SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Asunto	AUTO RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

1.- Procede el Despacho a resolver la excepción previa formulada por una de las entidades ~~demandas~~, de conformidad con la norma en cita y los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso de la siguiente manera:

Al respecto, revisadas las contestaciones de las accionadas, encuentra el despacho que se propusieron varias excepciones, donde la Secretaría de Educación de Bogotá, propuso algunas que citó como previas (falta de legitimación en la causa por pasiva y el no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios); a su turno, la apoderada del Ministerio de Educación Nacional propuso varias excepciones sin distingo de ser previas o perentorias, dentro de las que se observa se propuso la de *“ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”*.

Revisadas tanto las excepciones mencionadas como, las demás propuestas por las entidades, destaca el juzgado que dos de las mismas tiene la connotación de ser previas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del C.G.P.; el Despacho hace referencia a la correspondiente a **“No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”** propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá, e **“ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”**, propuesta por el Ministerio de Educación.

2.- Sobre la excepción previa propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá **“No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”**, la entidad invoca el artículo 61 del C.G.P. que transcribe, y luego aduce que el reconocimiento de las prestaciones sociales por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la obligación de las Entidades Territoriales, está regulado conforme con el Acuerdo No. 39 de 1988, en el cual el Consejo Directivo del Fondo prestacional del Magisterio, determinó el procedimiento encaminado al reconocimiento de un interés anual sobre el saldo de las cesantías de los docentes vinculados a partir de 1990.

Luego precisa que la Corte Constitucional en sentencia del 06 de febrero de 2020 estableció la responsabilidad del FOMAG en el trámite de las cesantías de los

docentes, que el comunicado No 008 de fecha 11-02-2020, expedido por Fiduprevisora S.A, realiza precisiones a la luz del acuerdo No 39 de 1998, indicando, que correrá por cuenta de las Secretarías de Educación de la mano del área nominadora, liquidar los reportes de las cesantías e ingresar la información necesaria para llevar a cabo el proceso correspondiente a través de aplicativo Humano. Finalizado el proceso anterior, que el sistema generará un reporte que debe ser remitido directamente a Fiduprevisora S.A con fecha límite, improrrogable del 05-02-2021, de lo contrario conlleva a la no inclusión en nómina de los docentes, por lo que considera la accionada, que Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de administradora de los recursos del Fondo, en virtud del Decreto 2831 de 2005, por autorización de la Ley 91 de 1989, es quien debe pagar las prestaciones sociales reconocidas a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atendiendo al contrato de fiducia celebrado entre dicha entidad fiduciaria y el Ministerio de Educación, por lo que su vinculación es ajustada a derecho y necesaria.

3.- De otro lado, sobre la excepción previa propuesta por el Ministerio de Educación **“ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”**, la entidad realizó su sustento, refiriendo inicialmente que el objeto de la demanda es declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 23 de noviembre de 2021, frente a la petición presentada ante Secretaria de Educación de Bogotá; que frente a ello, el ente territorial acusado mediante oficio de fecha 23 de agosto de 2021 dio respuesta a la solicitud presentada por el demandante, por lo que se da cuenta de la **inexistencia** del acto administrativo ficto o presunto demandado; de otro lado, cita un pronunciamiento del Consejo de Estado en sentencia de 15 de septiembre de 2011, dentro del radicado No. 50001-23-31-000-2005-40528-01 (0097-10), para sustentar que al desvirtuarse la ausencia de respuesta por parte de la administración, hay lugar a declarar la ineptitud de la demanda.

4.- Surtido el traslado de las excepciones, la parte demandante efectuó pronunciamiento oponiéndose a la prosperidad de la excepción previa propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá, para lo cual cita los artículos 3 y 4 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 180 de la Ley 115 de 1994, luego de lo cual concluye que Fiduciaria La Previsora S.A. tiene como única función la administración de los recursos del FOMAG, y dicho fondo es el encargado del pago de las prestaciones sociales y obligaciones accesorias a las mismas; siendo así el encargado del reconocimiento y pago de la sanción por mora, razón suficiente para que la actora no haya hecho la vinculación de Fiduprevisora, pues en caso de una condena, la entidad que debe pagar es Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la entidad territorial respectiva, y la Fiduprevisora S.A. no tiene responsabilidad en los presentes asuntos.

También se pronunció respecto a la excepción previa formulada por el Ministerio de Educación Nacional, argumentando que no está llamada a prosperar, por cuanto el acto administrativo sujeto a control judicial se individualizó en debida forma y se indicó que se había configurado el acto ficto negativo el día 20 de octubre de 2021, también que la respuesta dada por la entidad no es una respuesta de fondo.

Insiste en que la vulneración de derechos, se configura en virtud a la omisión en que han incurrido las entidades demandadas y la consecuente obligación que les asiste de reconocer y pagar la indemnización moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías del año 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991; indica que de

conformidad con las pruebas que reposan dentro del plenario, resulta claro que como las cesantías hasta la fecha no se han consignado en el respectivo Fondo Prestacional, la sanción debe calcularse hasta el momento en que se realice el pago efectivo, y de otro lado, como se vislumbra que los intereses fueron cancelados manera extemporánea, siendo preciso que se pague la indemnización prevista en la norma para dichos efectos.

Indica que el acto sujeto a control judicial producto del silencio de la administración es correcto, pues si bien hubo una respuesta por parte de la Secretaría de Educación, la misma no puede considerarse de fondo, en tanto indica que traslada la petición a la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora S.A., siendo un acto de mero trámite, careciendo entonces dicha respuesta de las características de un acto expreso que debiera demandarse.

5. Para resolver se **CONSIDERA**

5.1.- **“No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”**

Este Despacho procede a pronunciarse sobre la excepción propuesta que se enuncia, observando que en el artículo 100, numeral 9 del C.G.P., se establece como una de las excepciones previas que se pueden proponer, la de “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.”

El litisconsorcio necesario es una figura procesal que tiene como propósito vincular a un proceso o litigio un número plural de personas como parte pasiva o activa conectados por una única "relación jurídico sustancial", a fin de proferirse una decisión uniforme e igual para todos quienes integren la relación jurídico-procesal, por tanto se hace indispensable e imprescindible y por ende obligatoria su comparecencia. En ese sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado al respecto lo siguiente:

*"El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente (artículo 61 del C. G. del P.), lo cual impone que el proceso no pueda adelantarse sin la presencia de dicho litisconsorte, pues su vinculación resulta imprescindible y obligatoria"*¹

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado la conceptualización y los alcances del litisconsorcio necesario, así:

"La naturaleza de la relación jurídica sustancial que se debate en un proceso o Incluso una disposición legal, pueden imponer, en ciertos casos, la necesidad de integrar el contradictorio con todas las personas vinculadas a ella, pues no es posible escindirla «en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan»², porque la decisión que debe adoptarse necesariamente los comprende y obliga a todos ellos. Sin la presencia en el juicio de los sujetos vinculados a esa relación, entonces, no resulta procedente efectuar un pronunciamiento sobre el mérito de la cuestión litigiosa, dado que ésta debe dirimirse de manera uniforme para esos litisconsortes. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte, se trata de un «supuesto de legitimación forzosamente conjunta respecto de los titulares de la relación jurídica controvertida en el juicio» que surge cuando el vínculo o nexo de derecho sustancial sobre el cual debe recaer la resolución jurisdiccional está integrado «por una

¹ Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del 21 de noviembre de 2016. Radicado: 25000- 23-36-000-2014-00303-01 (55441). Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

² CSJ SC, 22 Jul. 1998, Rad. 5753.

pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos» que «se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no puede proceder con la Intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquélla, sino necesariamente con la de todos» (G.J. TCXXXIV, p. 170 y CLXXX, p. 381)³

Ahora bien, es conveniente destacar que la Ley 1437 de 2011 no reguló lo concerniente con el litisconsorte necesario, de suerte que se debe acudir al Código General del Proceso, el que dispone lo siguiente en su artículo 61:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas. Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.”

En efecto, la Ley 1564 de 2012 desarrolla el trámite que se debe surtir para la conformación del Litisconsorcio necesario; la regla general es que la demanda se formule por todas las partes y se dirija contra todas las partes, sin embargo, cuando esto no sucede, el juez de oficio ordenará el traslado y notificación del auto admisorio a quienes integren el contradictorio.

En caso de no conformarse en debida forma el contradictorio en la fase de admisión de la demanda, el juez de oficio o a petición de parte citará las personas que deban comparecer, siempre y cuando no se haya dictado sentencia en primera instancia.

Vale resaltar, que el anterior procedimiento aplica cuando se proponga como una solicitud de parte o en cumplimiento del deber legal del juez, contenido en el numeral 5º del artículo 42 del Código General del Proceso, de conformar o integrar el litisconsorcio necesario. Aunado a lo anterior, esta figura procesal también puede ser formulada como excepción previa tal como lo dispone el numeral 9 del artículo 100 ibídem: "No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios", tal como sucede en el caso de marras.

Resulta importante resaltar en este punto, que el litisconsorte necesario no es precisamente un tercero interviniente sino que se ubica en la categoría de parte dentro del litigio que se suscite, en la medida en que ingresan ocupando la posición de demandantes o demandados o en ambas dependiendo el caso, con los mismos derechos y deberes de los demás sujetos procesales.

³ Auto del 22 de julio de 2014. Rad. 11001-02-03-000-2012-02952-00. M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez.

Así las cosas, para resolver la excepción previa propuesta, corresponde al juzgado establecer si resulta procedente la vinculación de la FIDUPREVISORA S. A., como litisconsorte necesario por pasiva, en los casos en los que como en el presente se solicita el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

Para el presente caso, el Juzgado considera que no es necesaria la vinculación de la FIDUPREVISORA S. A. como administradora de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; lo anterior se explica por cuanto la Ley 91 de 1989 creó el FOMAG, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable, financiera y estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad, entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a los docentes afiliados a este fondo. En lo atinente al manejo de los recursos del Fondo, el artículo 3 ibidem dispuso que el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su administración.

Posteriormente, se expidió la Ley 962 de 2005, que en su artículo 56 dispuso que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio mediante la aprobación del proyecto de la resolución por parte de quien lo administre, el cual en todo caso debía ser elaborado por la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial certificada a la que se encuentre vinculado el docente.

Así mismo y de conformidad con el trámite dispuesto por el Decreto 2831 de 2005 artículos 2 y 3, la entidad territorial donde labora o laboraba la docente afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, participa en la elaboración de los proyectos de actos administrativos de reconocimiento de las prestaciones económicas. Posteriormente, con la aprobación por parte de la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos, los suscribe, haciéndolo en representación de dicho Fondo, por mandato de la ley y en esa medida las Secretarías de Educación no actúan en nombre de la entidad territorial, ni comprometen sus recursos para el pago de tales prestaciones.

Así las cosas, en este caso no están dados los supuestos para la existencia de un litisconsorcio necesario, pues la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., **actúa en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, obligado a reconocer y pagar las prestaciones económicas de los docentes, entre estas el reconocimiento de sanciones moratorias por el pago tardío de cesantías.

En virtud de lo anterior, se negará la solicitud de vinculación como litisconsorte necesario de la FIDUPREVISORA, presentada por la entidad demandada.

5.2.- “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”

El Despacho procede a pronunciarse sobre la excepción en cita, destacando que el artículo 100.5 del C.G.P., establece como otra de las excepciones previas que se pueden proponer, la de *“Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.”*

Frente a esta excepción, el Consejo de Estado ha precisado que dicha excepción se configura cuando ocurre alguna de las hipótesis que se expone a continuación:

“18. En tal sentido, el Despacho recuerda que el ordenamiento jurídico colombiano, numeral 5° del artículo 100 del CGP, consagra de manera expresa la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, la cual se encuentra encaminada fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso.

19. Cabe resaltar que dicha excepción se configura por dos razones:

a) Por falta de los requisitos formales: en este caso prospera la excepción cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda regulados en los artículos 161, 162, 163, 166 y 167 del CPACA, en cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella.

b) Por indebida acumulación de pretensiones: esta modalidad surge por la inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137, 138, 140, 141 y 165 ibídem.”⁴

En el caso concreto, el Despacho constata que la excepción propuesta por la administración consiste en que no existe ningún acto administrativo ficto y presunto, como se expresó en la demanda, habida cuenta que existe pronunciamiento del ente territorial (en este caso la Secretaría de Educación), que resolvió la solicitud del derecho de petición. Para resolver la excepción planteada, es menester remitirse al documento de respuesta que considera el Ministerio de Educación, es la respuesta al derecho de petición.

En la contestación, el Ministerio de Educación argumenta que, el ente territorial acusado mediante oficio de fecha de fecha 23 de agosto de 2021 dio respuesta a la solicitud presentada por el demandante, no obstante, no aporta siquiera copia de dicho documento de respuesta. Con todo, al advertirse que identifica el documento como emanado del ente territorial, el despacho procede a revisar los anexos de la contestación aportada por la otra entidad accionada (Secretaría de Educación de Bogotá), quien para este caso es el ente territorial y, en efecto aportó el documento visible en las páginas 30 y 31 del archivo 006 del expediente, que corresponde a oficio de **23 de agosto de 2021** y expedido por el Director de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito, que reza lo siguiente:

“Con relación a los numerales primero y segundo de su petición donde solicita se reconozca y pague la sanción por mora o indemnización moratoria por no haberle consignado las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2020 dentro del término legal y se le reconozca y pague la sanción por mora o indemnización moratoria por haberle pagado dentro del término legal los intereses a las cesantías causadas a a 31 de diciembre de 2020, nos permitimos informarle que:

- Mediante acuerdo No 39 de 1998, el Consejo Directivo del Fondo Prestacional del Magisterio, determinó el procedimiento a lugar, encaminado al reconocimiento de un interés anual sobre el saldo de las cesantías de los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes vinculados con anterioridad, solo si las cesantías son generadas a partir de la fecha referida, de acuerdo con el artículo 15, numeral 3°, literal B, de la ley 91 de 1989.*
- De conformidad al comunicado No 008 de fecha 11-02-2020, expedido por Fiduprevisora S.A, se realizan precisiones a la luz del acuerdo No 39 de 1998, indicando, que correrá por cuenta de las Secretarías de Educación de la mano del área nominadora, liquidar los reportes de las cesantías e ingresar la información necesaria para llevar a cabo el proceso correspondiente a través de aplicativo Humano. Finalizado el proceso anterior, el sistema generara un reporte, el cual debe ser remitido directamente a Fiduprevisora S.A con fecha límite, improrrogable del 05-02-2021, de lo contrario conllevará a la no inclusión en nómina de los docentes.*

⁴ Consejo de Estado, S.C.A., Sección Primera, Rad. Nro. 08001-23-33-000-2018-00355-01, 03 de diciembre de 2021, CP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

- En ese sentido, y una vez culminadas las etapas respectivas en los términos establecidos la Fiduprevisora procede a liquidar los intereses a las cesantías y como vocera de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, programa el correspondiente desembolso.
- Ni la Secretaría de Educación de Bogotá, ni ninguna entidad territorial certificada PAGA intereses de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG.
- De allí que la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación no liquida intereses a las cesantías de los docentes ya que por competencia establecida en la ley 91 de 1989, la responsable directa de liquidar y girar DIRECTAMENTE los intereses de cesantías a los docentes es la FIDUPREVISORA.
- La Oficina de Nómina reportó a la fiduciaria a comienzos de año y de manera oportuna los consolidados de cesantías docentes causadas durante la vigencia 2020 a la FIDUPREVISORA mediante oficios: S-2021-28027 del 05/02/2021 y recibido por la FIDUPREVISORA con el radicado 20210320319552 del 05/02/2021 para los docentes activos y S-2021-28017 del 04/05/2021 y recibido por la FIDUPREVISORA con el 20210320319552 del 05/02/2021 para los docentes retirados.
- Con lo anterior hacemos énfasis en que las entidades territoriales reportan a comienzo de cada año las cesantías anuales causadas por los docentes a la FIDUPREVISORA y dicha fiduciaria CALCULA, LIQUIDA Y GIRA DIRECTAMENTE a cada uno de los docentes los intereses a las cesantías.
- Por último, de acuerdo con el numeral tercero, a través del cual solicita se le expida la certificación de la fecha en que esta entidad territorial certificada giró al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías causadas al 31 de diciembre de 2020, al respecto nos permitimos informarle que es el Ministerio de Educación Nacional encargado de girar los recursos directamente a Fiduprevisora, es decir los recursos no son provienen de este ente territorial.

Por lo anterior y con el fin de responder su solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A, mediante radicado No **S-2021-273529** de fecha **23-08-2021**."

De la respuesta anterior, se destacan tres manifestaciones de la Secretaría de Educación:

- Indican que no pagan intereses de cesantías, sino que estos los cancela directamente la Fiduprevisora.
- Indican que las entidades territoriales reportan las cesantías causadas por los docentes a la Fiduprevisora, quien calcula, liquida y gira directamente a cada docente los intereses a las cesantías.
- Manifiestan que con el fin de responder de fondo la solicitud del peticionario, se dará traslado por competencia a la Fiduprevisora

A su vez, también destaca el Juzgado que nada dice el oficio, acerca de acceder o negarse al reconocimiento y pago de las sanciones e indemnizaciones por el pago tardío de las cesantías y sus intereses.

El artículo 43 del CPACA señala que son actos definitivos, "...los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación."

Visto lo anterior, considera el Juzgado que el oficio de 23 de agosto de 2021, enrostrado por el Ministerio de Educación, y que corresponde al arriba descrito, no es un acto definitivo, habida cuenta que no está decidiendo el fondo de las pretensiones del derecho de petición, incluso el propio oficio reconoce que no hay respuesta de fondo, al afirmar en su aparte final que con el fin de responder la solicitud de fondo, se dará traslado por competencia a Fiduprevisora S.A.

En consecuencia, el ataque procesal formulado por la parte accionada no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que no se observa contravención de los requisitos legales previstos en los artículos 162 y 163 del CPACA en concordancia con el artículo 43 ibídem.

En virtud de lo expuesto, este despacho resuelve que la excepción denominada “*ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales*” propuesta por la demandada Ministerio de Educación, no tiene vocación de prosperidad.

5.3.- La restante excepción propuesta por Secretaría de Educación de Bogotá, que se formuló como previa (falta de legitimación en la causa por pasiva), no está dentro de las contempladas en el artículo 100 del C.G.P., luego la **sentencia de mérito** es el escenario propicio para examinar si está o no llamada a prosperar. Las restantes excepciones propuestas por las entidades tocan el fondo del asunto, en virtud de lo cual sus argumentos también serán estudiados al momento de proferir sentencia.

5.4.- Finalmente, obra con la contestación, poderes conferidos por las entidades accionadas, así como sustituciones de poder, a los abogados que se enunciarán en la parte resolutive de este auto, para ejercer la representación de las entidades dentro del presente proceso. Igualmente se adjuntaron los documentos que sustentan los nombramientos de los funcionarios poderdantes. En consecuencia, se procederá a efectuar los reconocimientos de personería correspondientes.

En razón a lo anterior, este despacho

RESUELVE

1.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas “**No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios**” e “**ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales**”, propuesta por la entidad demandada Bogotá Distrito Capital- Secretaría de Educación, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.- Diferir el estudio de la excepción de “**FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**”, para el momento de proferir sentencia.

3.- RECONOCER personería adjetiva a LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS identificado con CC. Nro. 80.211.391 y T.P. 250.292 del C.S.J, para actuar en este proceso como apoderado principal de la Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos y para los efectos de poder conferido.

4.- RECONOCER personería adjetiva a MARIA PAZ BASTOS PICO identificada con CC. Nro. 1.096.227.301 y T.P. 194.959 del C.S.J, para actuar en este proceso como apoderada sustituta de la Nación- Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos y para los efectos de poder conferido y su sustitución.

5.- RECONOCER personería adjetiva a JUAN CARLOS JIMÉNEZ TRIANA identificado con la C.C. No. 1.015.407.639 y T.P. No. 213.500 del C.S.J., para actuar en este proceso como apoderado principal de Bogotá D.C.- Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos y para los efectos de poder conferido.

6.- RECONOCER personería adjetiva a VIVIANA CAROLINA RODRÍGUEZ PRIETO identificada con CC. Nro. 1.032.471.577 y T.P. 342.450 del C.S.J., para actuar en este proceso como apoderada sustituta de Bogotá D.C.- Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos y para los efectos de poder conferido y su sustitución.

7.- Ejecutoriado el presente auto, ingrésese el presente expediente al despacho para continuar con el trámite procesal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**AUGUSTO LLANOS RUÍZ
JUEZ**

A.O.-

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 565fba875b6a3dfbccccf15569ba87779722485cfa58551a7342e82f4b689ab3

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>